

Resumen

En el caso *Quinn contra Francia* relativo a la detención provisional del demandante el TEDH estima que el mantenimiento de la detención provisional supuso una vulneración del art. 5,1, descartando la relativa al art.5,3.

NORMATIVA ESTUDIADA

Conv. de 4 noviembre 1950. Convenio Europeo para la Protección Derechos Humanos y Libertades Fundamentales art.5.1.3

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD
DETENCIÓN PREVENTIVA

DETENCIÓN EN ASEGURAMIENTO
DURACIÓN

EXTRADICIÓN

FICHA TÉCNICA

Procedimiento:Procedimiento ante el TEDH

Legislación

Aplica art.5.1.3 de Conv. de 4 noviembre 1950. Convenio Europeo para la Protección Derechos Humanos y Libertades Fundamentales

Jurisprudencia

Citada por STEDH de 30 octubre 2001 (J2001/58115)

Citada por STEDH Sala 2ª de 8 abril 2004 (J2004/9152)

Citada por STEDH de 12 abril 2005 (J2005/23387)

Citada por STEDH de 25 enero 2005 (J2005/291)

Citada sobre DETENCIÓN PREVENTIVA - DURACIÓN por STEDH de 18 enero 2007 (J2007/1717)

Citada sobre DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD por STEDH de 10 mayo 2007 (J2007/25206)

Sinopsis *Relación de hechos:*

Siguiendo al depósito de 93 reclamaciones de inversionistas franceses, se realizó una instrucción en Francia en 1988. El señor Thomas Quinn, ciudadano estadounidense con residencia en París, fue arrestado el 1 de agosto de ese año en posesión de dos pasaportes falsos e inculpado ese mismo día por estafa, infracciones a la legislación sobre la emisión de títulos así como por falsificación de documentos administrativos. Posteriormente, el 29 de noviembre, se unió a la acusación inicial la circunstancia agravante de estafa con publicidad ("*escroquerie par une personne ayant fait appel public _l'épargne*"). Su detención provisional fue prolongada en tres ocasiones, la última de ellas el 20 de julio de 1989. El magistrado instructor consideró que ese era el único medio de asegurar la presentación ante la justicia del acusado, de nacionalidad extranjera, detenido en posesión de pasaportes falsos y que disponía fuera de Francia de numerosas residencias y cómplices. Interpuesto recurso ante la Sala de Acusación ("*chambre d'accusation*") del Tribunal de apelación de París. Este Tribunal, por decisión adoptada el 4 de agosto de 1989 a las 9 horas, ordenó que el señor Quinn fuera puesto inmediatamente en libertad si no estaba detenido por ninguna otra causa. La decisión no fue recurrida. El señor Quinn no fue puesto en libertad, dado que su liberación estaba sometida a la notificación de la decisión por el Procurador general encargado de su ejecución y el cumplimiento de una serie de formalidades. Ese mismo día, a las 17.30 horas, un juez de instrucción de Ginebra transmitió por telecopia a la fiscalía ("*parquet*") de París una solicitud de arresto provisional para proceder a la extradición del señor Quinn. El Fiscal ("*Procureur de la République*") de París ordenó su detención provisional. El señor Quinn permanecía todavía en prisión. Fue interrogado a las 20 horas y puesto en régimen de encarcelamiento para extradición ("*écrou extraditionnel*"). El 4 de octubre de 1989 la Sala de Acusación de París, con una composición diferente a la que tenía cuando dictó su detención provisional, notificó al señor Quinn el título en virtud del cual había tenido lugar su arresto. En el curso de su procedimiento de extradición, el señor Quinn solicitó en tres ocasiones su puesta en libertad, fundándose siempre en el art. 5 de la Convención. En todas las ocasiones fueron rechazadas sus peticiones. El 14 de marzo, la Sala de acusación se declaró favorable a la extradición. El recurso presentado ante el Tribunal de casación por el señor Quinn fue declarado inadmisibile por el Tribunal. En enero de 1991 el Primer Ministro acordó con Suiza la extradición del señor Quinn. El decreto le fue notificado a éste en febrero de ese mismo año. El 10 de julio de 1991 compareció ante el Tribunal correccional de París quien lo declaró culpable de varios delitos y le condenó a cuatro años de prisión y una pena pecuniaria. Tras ser rechazado su recurso contra el acta de extradición ante el Consejo de Estado en enero de 1992, fue finalmente extraditado el 24 de septiembre de ese año, una vez cumplida la pena impuesta por el Tribunal correccional.

Procedimiento ante la CEDH:

El señor Quinn acudió a la Comisión Europea de Derechos Humanos denunciando la irregularidad de la duración de su detención provisional, lo que estimaba incompatible con el artículo 5, párrafo 1 y 3 del Convenio. La Comisión concluyó, por unanimidad, que se habían producido infracciones al art. 5.1 de la Convención en lo que respecta a la privación de libertad del señor Quinn de las 9 horas a las 20 horas del día 4 de agosto. Por trece votos contra cuatro, estableció la Comisión que se había producido la violación del art. 5.1 en cuanto su detención a título de extradición. Por unanimidad no acogió la pretensión de vulneración del art. 5.3. La Comisión remitió el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 9 de diciembre de 1993.

Sobre la violación del art.5,1:

El Tribunal Europeo analizó, en primer lugar, la pretendida violación del art. 5.1 de la Convención. A su juicio, el mantenimiento de la detención provisional del día 4 de agosto supuso una vulneración del art. 5, párrafo 1 de la Convención. En cuanto a la detención al objeto de ser extraditado, el Tribunal entiende que en principio podría justificarse sobre la base del art. 5, párrafo 1 f). Sin embargo, y teniendo en cuenta entre otros extremos la excesiva prolongación de tal situación, concluye afirmando que el mantenimiento de esa situación supuso, igualmente, una violación del art. 5, párrafo 1.

Sobre la violación del art.5,3:

Por lo que respecta a la violación alegada del art. 5.3 de la Convención, considera el Tribunal que el período que se debe tomar en consideración, del 1 de agosto de 1988 al 4 de agosto de 1989, no supera el límite de lo razonable ni se puede apreciar negligencia alguna por parte de las autoridades. Por ello, y por unanimidad, considera que no se vulneró la mencionada disposición. Finalmente el Tribunal considera que no es necesario examinar la alegación de una posible infracción al art. 18 de la Convención.

Indemnización:

Resolución:

En aplicación del art. 50, el Tribunal accede en parte a la petición del señor Quinn en cuanto a los daños sufridos. El Tribunal señala una cantidad inferior a la solicitada en concepto de gastos y costas.

VERSION OFICIAL EN FRANCÉS

SENTENCIA

En l'affaire Quinn c. France (1),

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président, Thór Vilhjálmsson, L.-E. Pettiti, R. Macdonald, S.K. Martens, R. Pekkanen, A.B. Baka, L. Wildhaber, B. Repik,

ainsi que de M. H. Petzold, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 septembre 1994, 24 janvier et 25 février 1995,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: Notes du greffier

1. L'affaire porte le n° 47/1993/442/521. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déferées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

PROCEDURE

1. L'affaire a été déferée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 9 décembre 1993, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 18580/91) dirigée contre la République française et dont un ressortissant américain, M. Thomas Quinn, avait saisi la Commission le 17 juillet 1991 en vertu de l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 5 paras. 1 et 3 de la Convention (art. 5-1, art. 5-3).

2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).

3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 28 janvier 1994, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, R. Macdonald, N. Valticos, S.K. Martens, A.B. Baka, L. Wildhaber et B. Repik, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43). Ultérieurement, M. I. Foighel,

suppléant, a remplacé M. Valticos, empêché; à son tour, M. R. Pekkanen, suppléant, a remplacé M. Foighel, également empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement A).

4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 25 mai 1994 et celui du Gouvernement le 31 mai. Le 7 juin, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait oralement.

Le 13 juin 1994, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.

5. Constatant l'absence de l'agent du Gouvernement et du délégué de la Commission le 19 septembre 1994, jour fixé pour l'audience, le président a décidé de reporter les débats au lendemain. Ceux-ci se sont déroulés en public le 20 septembre 1994, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

MM. P. Titium, magistrat détaché à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, agent, G. Bitti, chargé de mission au service des affaires européennes et internationales du ministère de la Justice, conseil;

- pour la Commission

Mme G.H. Thune déléguée;

- pour le requérant

Me N. Maryan Green, avocat à la cour d'appel de Paris et Barrister-at-Law à Londres, conseil.

Les deux autres conseils du requérant, Mes D. Bouthors et F. Serres, étaient présents à Strasbourg le 19 septembre 1994 mais n'ont pu participer à l'audience du lendemain.

6. La Cour a entendu en leurs déclarations M. Titium, Mme Thune et Me Maryan Green.

EN FAIT

I. Les circonstances de l'espèce

7. M. Thomas Quinn, né à New York en 1937, est de nationalité américaine et résidait à Paris. Le 24 septembre 1992, le gouvernement français l'a extradé vers la Suisse.

A. La procédure pénale en France

1. La procédure d'instruction

a) Les poursuites

8. A la suite du dépôt de quatre-vingt-treize plaintes d'investisseurs français, une instruction fut menée en France dès 1988. Les intéressés avaient été démarchés par des sociétés de courtage établies en Suisse et au Liechtenstein, pour acquérir, à des cours artificiellement gonflés, des actions émises sur le marché américain par des sociétés fictives. Les sommes perçues étaient reversées sur des comptes ouverts en Suisse au nom de sociétés étrangères, mais les plaignants ne purent jamais réaliser leurs titres. Onze personnes, dont le requérant, toutes de nationalité étrangère, furent poursuivies.

9. Arrêté le 1er août 1988 en possession de deux faux passeports grecs, M. Quinn fut le jour même inculpé du chef d'escroquerie, d'infractions à la législation sur l'émission de titres ainsi que de falsification de documents administratifs. Le 29 novembre suivant, le juge assortit l'inculpation initiale de la circonstance aggravante d'escroquerie par une personne ayant fait appel public à l'épargne.

b) La détention provisoire

10. Le jour de son arrestation, M. Quinn fut placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de la Santé à Paris.

Le magistrat instructeur prolongea par trois fois, les 30 novembre 1988, 23 mars et 20 juillet 1989, et pour quatre mois la détention provisoire. Il considérait en effet celle-ci comme l'unique moyen d'assurer la représentation en justice d'un inculpé de nationalité étrangère, arrêté en possession de faux passeports et disposant hors de France de plusieurs résidences et de nombreux complices.

c) L'arrêt de remise en liberté

11. M. Quinn interjeta appel devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris de l'ordonnance du 20 juillet 1989 prolongeant sa détention provisoire.

Ayant tenu audience le 2 août 1989, la cour infirma la décision contestée par un arrêt rendu, hors la présence du requérant, le 4 août à 9 heures. Elle ordonna qu'il fût "sur-le-champ remis en liberté s'il n'[était] pas détenu pour autre cause", par les motifs ci-après:

"Considérant qu'au stade actuel de l'information, menée avec diligence, et des présomptions subsistant contre Quinn, la détention n'apparaît plus nécessaire à la manifestation de la vérité;

Que, compte tenu des remboursements effectués ou en cours, elle ne répond plus aux exigences de l'ordre public;

Qu'enfin, les saisies opérées sont de nature à assurer la comparution en justice de l'appelant, qui offre par ailleurs des garanties de domiciliation et de stabilité."

Cette décision immédiatement exécutoire ne fit l'objet d'aucun recours.

12. Le requérant ne fut pourtant pas remis en liberté: sa libération effective était subordonnée à la notification de la décision d'élargissement par le procureur général chargé de son exécution et à l'accomplissement des formalités de levée d'écrou.

2. La procédure de jugement

13. Le requérant comparut détenu sous écrou extraditionnel (paragraphe 16 et 17 ci-dessous) devant le tribunal correctionnel de Paris qui, le 10 juillet 1991, le déclara coupable d'escroquerie au préjudice de quatre-vingt-treize personnes et d'organisation de démarchage en vue d'opérations sur des valeurs mobilières étrangères en France, sans autorisation préalable. Condamné à quatre ans d'emprisonnement et 300 000 francs français (FRF) d'amende, il fut placé sous mandat de dépôt (paragraphe 30 ci-dessous).

14. Le ministère public et M. Quinn saisirent la cour d'appel de Paris. Par un arrêt du 23 avril 1992, celle-ci écarta la circonstance aggravante d'appel public à l'épargne. Elle infligea à l'intéressé une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et ordonna son maintien en détention (paragraphe 30 ci-dessous).

15. Le requérant, qui s'était trouvé en détention provisoire du 1er août 1988 au 4 août 1989, puis pendant la procédure de jugement - soit environ un an et dix mois -, fut extradé vers la Suisse le 24 septembre 1992 après avoir purgé sa peine.

B. La procédure d'extradition vers la Suisse

1. La détention aux fins d'extradition

a) Le placement sous écrou extraditionnel

16. Le 4 août 1989 vers 17 h 30, un juge d'instruction de Genève transmet par télécopie au parquet de Paris une demande d'arrestation provisoire - également adressée par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) le 5 août et par la voie diplomatique le 16 août - en vue de l'extradition du requérant, désigné comme "actuellement détenu à la prison de la Santé à Paris, placé ce jour en liberté provisoire".

Intitulée "fiche d'accompagnement", ladite demande portait la mention "très urgent, à remettre en mains propres au destinataire [un substitut du procureur de la République], qui est au courant".

Y était joint le mandat d'arrêt international délivré par le magistrat contre M. Quinn des chefs d'escroquerie par métier et faux dans les titres. Il lui était reproché d'avoir, avec ses comparses, vendu des titres de sociétés américaines à près de dix mille investisseurs dans le monde, en les trompant sur la valeur de ces actions et en faisant usage de fausses identités pour se faire créditer sur des comptes bancaires suisses. Le préjudice global était évalué à plus de dix millions de dollars américains.

17. Le procureur de la République de Paris ordonna l'arrestation provisoire du requérant. Ce dernier, qui était encore incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé, y fut appréhendé. Le procureur l'interrogea vers 20 heures et le plaça sous écrou extraditionnel.

18. Le 4 octobre 1989, la chambre d'accusation de Paris - siégeant dans une composition différente de celle qui avait statué sur la détention provisoire - notifia à M. Quinn le titre en vertu duquel avait eu lieu son arrestation.

b) Les demandes d'élargissement

19. Au cours de la procédure d'extradition suivie contre lui, M. Quinn sollicita à trois reprises son élargissement, en se fondant toujours sur l'article 5 (art. 5) de la Convention. Il dénonçait les circonstances de son placement en détention.

Dans les trois arrêts qu'elle rendit les 23 août 1989, 2 novembre 1989 et 19 décembre 1990, la chambre d'accusation le débouta de tous ses recours en déclarant que la détention avait été ordonnée conformément aux dispositions de la Convention européenne d'extradition. Elle justifia le refus de mise en liberté par le risque de fuite et le défaut de garantie de représentation en justice et considéra, quant à la durée de la détention, que la procédure s'était "déroulée de manière continue et sans retard".

A l'intéressé qui se plaignait de l'irrégularité de son placement en détention à titre extraditionnel, elle répondit que "les allégations des mémoires sur ce point ressortiss[ai]ent au droit interne français et n'[avaient] pas à être examinées dans une procédure d'extradition".

20. Saisie par trois fois de pourvois du requérant, la Cour de cassation indiqua dans un arrêt de rejet du 19 décembre 1989 que

"(...) contrairement aux allégations de Thomas Quinn, les juges n'étaient pas tenus, pour justifier le maintien en détention, de se référer aux seules dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale [paragraphe 29 ci-dessous], dès lors qu'en matière d'extradition il ne leur appartient pas de connaître de la réalité des charges qui pèsent sur la personne réclamée."

Elle précisa dans un autre arrêt de rejet, du 15 avril 1991, que les juges ne se préoccupent pas "des conditions et modalités de l'action publique étrangère", et que "l'arrêt de la chambre d'accusation du 4 août 1989 qui a[vait] ordonné [la] mise en liberté [du requérant] dans la procédure suivie en France contre lui n'a[vait] aucune autorité en matière extraditionnelle".

2. L'extradition

a) L'avis de la chambre d'accusation

21. Le 16 août 1989, le procureur général procéda à l'interrogatoire d'identité du requérant.

22. Par un arrêt avant dire droit du 2 novembre 1989, la chambre d'accusation sollicita un complément d'informations auprès de l'Etat demandeur.

Les renseignements qu'elle recueillit au sujet des plaignants, des comptes bancaires et des faits constitutifs des manoeuvres frauduleuses, furent portés à la connaissance du requérant lors d'une audience tenue le 17 janvier 1990. M. Quinn argua d'un détournement de procédure de la part de l'Etat suisse: les services de ce pays auraient tenté d'empêcher la juridiction française d'exercer sa compétence.

23. Le 14 mars 1990, la chambre d'accusation se déclara favorable à l'extradition.

Se prononçant sur les notions d'"urgence" et d'"individu recherché" au sens de la Convention européenne d'extradition, elle indiqua:

"Que l'appréciation de l'urgence est du ressort de cet Etat [la Suisse] et que cette urgence trouve sa justification dans le fait que la mise en liberté de Quinn dans la procédure interne française venait d'être ordonnée;

Qu'il ne saurait être reproché aux autorités françaises d'avoir prévenu les autorités suisses, ce comportement paraissant normal et habituel, dans le cadre de la coopération judiciaire internationale."

24. Le 24 juillet 1990, la Cour de cassation rejeta comme irrecevable, en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 (paragraphe 28 ci-dessous), le pourvoi introduit par M. Quinn contre l'avis de la chambre d'accusation.

b) La décision d'extrader

25. Le 24 janvier 1991, le Premier ministre accorda à la Suisse l'extradition du requérant. Le décret fut notifié à l'intéressé le 19 février suivant.

Celui-ci en demanda le sursis à exécution et l'annulation auprès du Conseil d'Etat qui le débouta le 31 janvier 1992, notamment au motif suivant:

"(...) la circonstance que le mandat d'arrêt ait été émis par un juge suisse le jour où la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris statuait sur une demande de mise en liberté de M. Quinn, inculpé en France, ne révèle pas, contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'existence d'un détournement de procédure."

26. M. Quinn, qui avait été en détention sous écrou extraditionnel du 4 août 1989 au 10 juillet 1991 - soit pendant un an, onze mois et six jours -, fut remis aux autorités suisses le 24 septembre 1992 (paragraphe 15 ci-dessus).

II. Le droit et la pratique pertinents

A. Le droit international

27. La Convention européenne d'extradition, signée à Paris le 13 décembre 1957 et entrée en vigueur le 11 mai 1986, prévoit:

Article 1er - Obligation d'extrader

"Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante."

Article 7 - Lieu de perpétration

"1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.

(...)"

Article 8 - Poursuites en cours pour les mêmes faits

"Une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée."

Article 16 - Arrestation provisoire

"1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.

(...)

4. (...) la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.

(...)"

Article 18 - Remise de l'extradé

"(...)

3. En cas d'acceptation [de la demande d'extradition], la Partie requérante sera informée du lieu et de la date de la remise, ainsi que de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par l'individu réclamé.

(...)"

Article 19 - Remise ajournée ou conditionnelle

"1. La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée.

2. Au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre Parties."

B. Le droit national

1. En matière d'extradition

28. La loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers dispose:

Article 1er

"En l'absence de traité, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi. La présente loi s'applique également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités."

Article 5

"L'extradition n'est pas accordée:

(...)

3. Lorsque les crimes ou délits ont été commis en France ou dans les possessions coloniales françaises;

(...)"

Article 8

"Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en France, et où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.

(...)"

Article 16

"Dans le cas contraire [si l'intéressé ne consent pas à être livré aux autorités du pays requérant], la chambre des mises en accusation, statuant sans recours, donne son avis motivé sur la demande d'extradition.

(...)"

Article 17

"Si l'avis motivé de la chambre des mises en accusation repousse la demande d'extradition, cet avis est définitif et l'extradition ne peut être accordée."

Article 18

"Dans le cas contraire, le ministre de la justice propose, s'il y a lieu, à la signature du Président de la République, un décret autorisant l'extradition. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet acte, l'extradé n'a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause."

2. En matière de détention provisoire

29. Aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale ("CPP"):

"(...) la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue:

1. Lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices;
2. Lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.

(...)"

L'article 145-1 CPP est ainsi libellé:

"En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l'article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.

Lorsque l'inculpé n'a pas déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'il n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.

Dans les autres cas, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois, par une ordonnance motivée, rendue conformément aux dispositions de l'article 145, premier et cinquième alinéas, qui peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà de deux ans lorsqu'il n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans.

(...)"

30. L'exécution des jugements étant suspendue pendant les délais d'exercice des voies de recours, les juridictions peuvent ordonner à l'audience la mise ou le maintien en détention du prévenu condamné (articles 464-1, 465 et 569 CPP). Cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée (article 24 CPP).

31. Le détenu écroué à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger est soumis au même régime que le prévenu (article D 507 CPP).

32. La décision de la juridiction qui statue sur une demande d'élargissement est immédiatement exécutoire (article 148-2, 2^e alinéa, CPP), la charge de s'en assurer revenant au procureur général (article 207 CPP).

33. Préalablement à sa mise en liberté, l'inculpé détenu doit faire la déclaration de son adresse (article 148-3 CPP) auprès du juge d'instruction si celui-ci l'a fait extraire, ou sinon du chef de l'établissement pénitentiaire. Dans la mesure où il est demandé à ce dernier de recueillir l'adresse avant de procéder à la mise en liberté d'un prévenu, le juge d'instruction doit lui indiquer, lors de l'envoi de l'ordre de levée d'écrou, si l'inculpé a déjà déclaré une adresse devant lui.

Au moment de la levée de l'écrou, chaque libéré reçoit un billet de sortie (article D 288 CPP); lorsque plusieurs détenus sont libérables le même jour, des précautions sont prises pour qu'ils ne se rencontrent pas, mais l'application de cette règle ne doit pas avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où ils doivent être libérés (article D 289 CPP).

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

34. M. Quinn a saisi la Commission le 17 juillet 1991. Il dénonçait l'irrégularité et la durée de sa détention provisoire qu'il estimait incompatibles avec l'article 5 par. 1 et 3 (art. 5-1, art. 5-3) de la Convention, lu isolément et combiné avec l'article 18 (art. 5+18): en le plaçant sous écrou extraditionnel, les autorités françaises n'auraient cherché qu'à assurer sa représentation dans la procédure nationale en dépit de l'arrêt de la chambre d'accusation ordonnant son élargissement immédiat.

35. La Commission a retenu la requête (n° 18580/91) le 8 janvier 1993. Dans son rapport du 22 octobre 1993 (article 31) (art. 31), elle relève des infractions à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention du fait de la privation de liberté du requérant le 4 août 1989 de 9 heures à 20 heures (unanimité), et de sa détention à titre extraditionnel (treize voix contre quatre), mais conclut à l'absence de violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) (unanimité). Le texte intégral de son avis et des trois opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1). 1. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 311 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

CONCLUSIONS PRESENTÉES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

36. A l'audience, le Gouvernement a confirmé les conclusions de son mémoire. Il y invitait la Cour à "dire qu'il n'y a pas eu violation des article 5 par. 1 et 5 par. 3 (art. 5-1, art. 5-3) de la Convention".

EN DROIT

I. INTRODUCTION

37. M. Quinn prétend avoir été arbitrairement maintenu en détention le 4 août 1989, le temps pour le parquet de Paris de provoquer la mise en œuvre de la procédure d'extradition et faire ainsi échec à la décision d'élargissement immédiat prise le matin même par la

chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. Sa détention à titre extraditionnel aurait constitué le simple prolongement, à un autre titre, de la période de détention provisoire qui venait de s'achever dans la procédure suivie en France.

Invoquant ensemble les articles 5 paras. 1 et 3, et 18 (art. 5-1, art. 5-3, art. 18) de la Convention, l'intéressé allègue un détournement de la procédure d'extradition pour les besoins de l'instruction en France et dénonce l'irrégularité de sa détention dans le cadre de ladite procédure ainsi que la durée de sa privation de liberté avant jugement.

II. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L'ARTICLE 5 PAR. 1 (art. 5-1) DE LA CONVENTION

38. D'après le requérant, son maintien en détention le 4 août 1989 et la détention subséquente aux fins d'extradition ont enfreint l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention qui, dans la mesure où il joue un rôle en l'espèce, se lit ainsi:

"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

(...)

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;

(...)

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours."

A. La détention le 4 août 1989

39. M. Quinn soutient qu'il devait être remis en liberté "sur-le-champ", en exécution de l'arrêt prononcé le matin même, et qu'il est donc arbitrairement resté en détention pour être de nouveau arrêté à la demande des autorités helvétiques.

40. Tel est aussi l'avis de la Commission.

41. Le Gouvernement explique que la libération effective ne pouvait avoir lieu sans délai en raison des formalités de levée d'écrou, plus longues en période de vacances judiciaires.

42. La Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but et l'objet de cette disposition (art. 5-1): assurer que nul ne soit arbitrairement dépouillé de sa liberté (voir notamment les arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 12, par. 22, et Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 11, par. 24).

Elle reconnaît qu'un certain délai dans l'exécution d'une décision de remise en liberté est normal; elle constate cependant qu'en l'espèce le requérant est resté détenu pendant onze heures après l'arrêt de la chambre d'accusation qui ordonnait son élargissement "sur-le-champ" et sans que cette décision lui ait été notifiée ni qu'elle ait reçu un commencement d'exécution.

Le maintien en détention de M. Quinn le 4 août 1989 ne relevait manifestement pas de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5-1-c) et ne ressortissait à aucun autre de ses alinéas.

43. Dès lors il y a eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) à cet égard.

B. La détention aux fins d'extradition

44. M. Quinn conteste ensuite la régularité de sa détention à titre extraditionnel, en raison non seulement des circonstances de son arrestation au soir du 4 août 1989, mais aussi de la durée de sa privation de liberté. Les procédures d'extradition se caractérisant le plus souvent par leur extrême rapidité, un délai de près de deux ans révélerait un détournement de la procédure d'extradition: en réalité, les autorités françaises auraient cherché à garder l'intéressé à leur disposition le temps nécessaire à la poursuite de l'instruction en France.

45. La Commission souscrit en substance à la thèse du requérant.

46. Quant au Gouvernement, il la combat. Rappelant que la Convention européenne d'extradition emporte pour les Etats parties obligation d'extrader, il affirme que la détention à titre extraditionnel - seule à même de garantir la remise de l'intéressé à la Partie requérante - a été en l'occurrence ordonnée dans le respect des règles de l'extradition, comme les juridictions françaises l'ont constaté, et visait uniquement à livrer le requérant à la justice de l'Etat demandeur.

Face à l'urgence de la situation - la libération imminente de M. Quinn -, les autorités helvétiques avaient requis par télécopie le 4 août 1989 l'arrestation provisoire de l'intéressé. La procédure aurait ensuite été menée avec la diligence implicitement exigée par l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f), et le temps passé en détention aurait été signalé aux autorités concernées pour qu'il vienne en déduction des peines éventuellement prononcées. Enfin, les nombreux recours, exercés et abondamment développés par le requérant devant les juridictions internes, auraient contribué à prolonger la privation de liberté.

47. La Cour estime que la détention aux fins d'extradition se justifiait dans son principe au regard de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f).

Ce texte (art. 5-1) requiert d'abord la "régularité" de la détention, y compris l'observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale, mais elle commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 (art. 5): protéger l'individu contre l'arbitraire (arrêts Van der Leer et Wassink précités). Mieux placées que les organes

de la Convention pour vérifier le respect du droit interne, les juridictions nationales ont constaté la régularité de la détention litigieuse dans sa phase initiale et quant à sa finalité. Elles ont pu, à juste titre, prendre en considération les nécessités de l'entraide judiciaire internationale.

A la différence de la Commission, la Cour n'aperçoit, en l'espèce, aucun élément donnant à penser que la détention à titre extraditionnel ait poursuivi un but différent de celui pour lequel elle fut imposée et qu'elle ait revêtu le caractère d'une détention provisoire déguisée. En particulier, les circonstances de l'arrestation de M. Quinn et la concomitance des poursuites ne peuvent, à elles seules, l'amener à conclure au détournement, à des fins de droit interne, de la procédure d'extradition et, partant, à l'irrégularité de la détention ordonnée en réponse au juge d'instruction de Genève.

48. La Cour constate cependant la longueur inhabituelle de la détention du requérant sous écrou extraditionnel. En effet, M. Quinn fut détenu à ce titre du 4 août 1989 au 10 juillet 1991, soit pendant presque deux ans (paragraphe 26 ci-dessus). A compter de ce jour, il purgea la peine infligée par la cour d'appel de Paris et ce jusqu'au 24 septembre 1992, date à laquelle il fut remis aux autorités suisses en exécution du décret du 24 janvier 1991.

Le libellé tant du texte français que du texte anglais de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) signifie que seul le déroulement de la procédure d'extradition justifie la privation de liberté fondée sur cet alinéa. Il s'ensuit que si la procédure n'est pas menée par les autorités avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f). Or la Cour observe, aux différentes étapes de la procédure d'extradition, des retards suffisamment importants pour considérer excessive la durée totale de ladite procédure: la première décision concernant le fond, un arrêt avant dire droit, intervint le 2 novembre 1989, soit trois mois après le placement de l'intéressé sous écrou extraditionnel, et le décret d'extradition ne fut pris que le 24 janvier 1991, soit dix mois après l'avis favorable de la chambre d'accusation (paragraphe 22 et 25 ci-dessus). Les recours exercés par M. Quinn pendant cette période (trois pourvois contre les décisions de rejet des demandes de mise en liberté et un pourvoi contre l'avis de la chambre d'accusation - paragraphes 20 et 23 ci-dessus) n'ont pas sensiblement retardé la procédure.

La détention à titre extraditionnel s'est prolongée bien au-delà de l'adoption du décret d'extradition, jusqu'au 10 juillet 1991, puisque la remise du requérant aux autorités suisses fut ajournée, par application de l'article 19 par. 1 de la Convention européenne d'extradition, du fait des poursuites simultanément menées en France. La Cour n'a pas à se prononcer sur le choix des mesures qu'auraient dû prendre les autorités nationales dans cette situation pour empêcher que la détention sous écrou extraditionnel, qui avait déjà dépassé la limite du raisonnable à la date du 24 janvier 1991, ne se prolongeât encore davantage et cela d'autant plus que ladite détention n'a pu être déduite de la peine infligée en France.

49. Partant, il y a eu violation de l'article 5 par. 1 (par. 5-1) sur ce point aussi.

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3) DE LA CONVENTION

50. M. Quinn dénonce également la durée totale de sa privation de liberté avant jugement. Elle aurait méconnu l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, ainsi libellé:

"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."

A. Période à prendre en considération

51. Selon le requérant, sa mise sous écrou extraditionnel n'aurait servi qu'à le garder en détention pour les besoins de l'instruction en France. Sa détention provisoire aurait débuté le 1er novembre 1988 et pris fin le 10 juillet 1991 avec le jugement du tribunal correctionnel de Paris.

52. Le Gouvernement ne se prononce que sur la première période de ladite détention, du 1er août 1988 au 4 août 1989.

53. Avec la Commission, la Cour rappelle que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) ne renvoie qu'au paragraphe 1 c) de l'article 5 (art. 5-1-c) (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 39, par. 71). Il est donc inapplicable à la détention à titre extraditionnel prévue par l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f).

Il n'en va pas de même de la détention provisoire subie dans le cadre de la procédure française du 1er août 1988 au 4 août 1989, soit pendant un an.

B. Caractère raisonnable de la durée de la détention

54. Pour le Gouvernement, la période litigieuse n'a pas dépassé les limites du raisonnable et se justifiait par la dimension internationale des faits et le danger de fuite.

55. Tel est aussi l'avis de la Commission.

56. A la lumière des circonstances de l'affaire, la Cour ne juge pas excessive ladite période. En particulier, elle ne discerne aucune négligence des autorités, qui ont agi avec la promptitude nécessaire. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).

IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 18 (art. 18) DE LA CONVENTION

57. M. Quinn reproche enfin aux autorités françaises d'avoir abusé de la procédure d'extradition en la détournant de sa finalité. Elles auraient principalement cherché à faire obstacle à sa libération, au mépris de l'article 18 (art. 18) de la Convention, qui dispose:

"Les restrictions qui, aux termes de la (...) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues."

Cette disposition (art. 18) assurerait une protection spécifique et pourrait jouer indépendamment d'autres articles de la Convention.

58. Gouvernement et Commission ne prennent pas position sur le grief.

59. Ayant déjà constaté qu'aucun élément du dossier n'étayait la thèse du détournement de procédure, la Cour n'estime pas devoir examiner les mêmes faits sous l'angle de l'article 18 (art. 18).

V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION

60. Aux termes de l'article 50 (art. 50),

"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

A. Dommage

61. Invoquant la pratique des remises de peine, M. Quinn considère avoir subi dix-huit mois d'emprisonnement supplémentaires. Il réclame une indemnité de 100 000 FRF par mois indûment passé en détention.

62. Pour le Gouvernement, qui conteste le fondement juridique de la demande, le dommage moral serait suffisamment réparé par le constat d'une violation.

63. La déléguée de la Commission, elle, reconnaît au requérant le droit à une satisfaction équitable mais n'avance pas de chiffre.

64. La Cour estime que le maintien en détention le 4 août 1989 a causé au requérant un préjudice moral justifiant l'allocation d'une somme de 10 000 FRF. Pour le tort que l'intéressé a pu subir ensuite en raison de la durée excessive de sa détention à titre extraditionnel, elle accorde un montant de 50 000 FRF.

B. Frais et dépens

65. M. Quinn sollicite le remboursement de ses frais et dépens, soit 362 000 FRF (Me Bouthors: 112 000 FRF; Me Serres: 250 000 FRF) pour les procédures menées devant les juridictions françaises et 285 000 FRF au titre de l'instance suivie devant les organes de la Convention.

66. Le Gouvernement trouve exagérées les sommes avancées, les autorités françaises ne devant pas supporter les conséquences du choix de plusieurs avocats.

67. Quant à la déléguée de la Commission, elle ne se prononce pas sur ce point.

68. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour accorde à l'intéressé 150 000 FRF pour ses frais et dépens, principalement ceux exposés à Strasbourg.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention en raison du maintien en détention du requérant le 4 août 1989;

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention à cause de la durée de la détention du requérant à titre extraditionnel;

3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention;

4. Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 18 (art. 18) de la Convention;

5. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 60 000 (soixante mille) francs français pour dommage moral et 150 000 (cent-cinquante mille) francs français pour frais et dépens;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 22 mars 1995.

Signé: Rolv RYSSDAL Président

Signé: Herbert PETZOLD Greffier

VERSION OFICIAL EN INGLÉS

SENTENCIA

In the case of *Quinn v. France* (1),

The European Court of Human Rights, sitting, in accordance with Article 43 (art. 43) of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention") and the relevant provisions of Rules of Court A (2), as a Chamber composed of the following judges:

Mr R. Ryssdal, President, Mr Thór Vilhjálmsson, Mr L.-E. Pettiti, Mr R. Macdonald, Mr S.K. Martens, Mr R. Pekkanen, Mr A.B. Baka, Mr L. Wildhaber, Mr B. Repik,

and also of Mr H. Petzold, Registrar,

Having deliberated in private on 22 September 1994 and 24 January and 25 February 1995,

Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date: Notes by the Registrar

1. The case is numbered 47/1993/442/521. The first number is the case's position on the list of cases referred to the Court in the relevant year (second number). The last two numbers indicate the case's position on the list of cases referred to the Court since its creation and on the list of the corresponding originating applications to the Commission.

2. Rules A apply to all cases referred to the Court before the entry into force of Protocol No. 9 (P9) and thereafter only to cases concerning States not bound by that Protocol (P9). They correspond to the Rules that came into force on 1 January 1983, as amended several times subsequently.

PROCEDURE

1. The case was referred to the Court by the European Commission of Human Rights ("the Commission") on 9 December 1993, within the three-month period laid down by Article 32 para. 1 and Article 47 (art. 32-1, art. 47) of the Convention. It originated in an application (no. 18580/91) against the French Republic lodged with the Commission under Article 25 (art. 25) by an American national, Mr Thomas Quinn, on 17 July 1991.

The Commission's request referred to Articles 44 and 48 (art. 44, art. 48) and to the declaration whereby France recognised the compulsory jurisdiction of the Court (Article 46) (art. 46). The object of the request was to obtain a decision as to whether the facts of the case disclosed a breach by the respondent State of Article 5 paras. 1 and 3 (art. 5-1, art. 5-3) of the Convention.

2. In response to the enquiry made in accordance with Rule 33 para. 3 (d) of Rules of Court A, the applicant stated that he wished to take part in the proceedings and designated the lawyer who would represent him (Rule 30).

3. The Chamber to be constituted included ex officio Mr L.-E. Pettiti, the elected judge of French nationality (Article 43 of the Convention) (art. 43), and Mr R. Ryssdal, the President of the Court (Rule 21 para. 3 (b)). On 28 January 1994, in the presence of the Registrar, the President drew by lot the names of the other seven members, namely Mr Thór Vilhjálmsson, Mr R. Macdonald, Mr N. Valticos, Mr S.K. Martens, Mr A.B. Baka, Mr L. Wildhaber and Mr B. Repik (Article 43 in fine of the Convention and Rule 21 para. 4) (art. 43). Subsequently, Mr I. Foighel, substitute judge, replaced Mr Valticos, who was unable to take part in the further consideration of the case. Mr Foighel was later likewise prevented from participating further in the case and was replaced by another substitute judge, Mr R. Pekkanen (Rules 22 para. 1 and 24 para. 1).

4. As President of the Chamber (Rule 21 para. 5), Mr Ryssdal, acting through the Registrar, consulted the Agent of the French Government ("the Government"), the applicant's lawyer and the Delegate of the Commission on the organisation of the proceedings (Rules 37 para. 1 and 38). Pursuant to the order made in consequence, the Registrar received the applicant's memorial on 25 May 1994 and the Government's memorial on 31 May. On 7 June the Secretary to the Commission informed the Registrar that the Delegate would submit his observations at the hearing.

On 13 June 1994 the Commission produced the file on the proceedings before it, as requested by the Registrar on the President's instructions.

5. On 19 September 1994, the day on which the hearing was due to be held, the President, noting that neither the Agent of the Government nor the Delegate of the Commission were present, decided to postpone the hearing to the following day. The hearing took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 20 September 1994. The Court had held a preparatory meeting beforehand.

There appeared before the Court:

(a) for the Government

Mr P. Titun, magistrat, on secondment to the Legal Affairs Department of the Ministry of Foreign Affairs, Agent, Mr G. Bitti, special adviser to the European and International Affairs Department, Ministry of Justice, Counsel;

(b) for the Commission

Mrs G.H. Thune, Delegate;

(c) for the applicant

Mr N. Maryan Green, avocat at the Paris Court of Appeal and Barrister-at-Law, London, Counsel.

The applicant's other two lawyers, Mr D. Bouthors and Mr F. Serres, were in Strasbourg on 19 September 1994, but were unable to attend the hearing on the following day.

6. The Court heard addresses by Mr Titun, Mrs Thune and Mr Maryan Green.

AS TO THE FACTS

I. Circumstances of the case

7. Mr Thomas Quinn, who was born in New York in 1937, is an American national and at the material time lived in Paris. On 24 September 1992 the French Government extradited him to Switzerland.

A. The criminal proceedings in France

1. The judicial investigation

(a) The institution of criminal proceedings

8. Following ninety-three complaints laid by French investors, an investigation was opened in France in 1988. The persons concerned had been approached by brokers established in Switzerland and in Liechtenstein who had sold them at artificially inflated rates shares issued on the American market by sham companies. The sums collected were paid into accounts opened in Switzerland in the name of foreign companies, but the complainants were never able to realise their shares. Criminal proceedings were instituted against eleven persons, including the applicant. They were all foreign nationals.

9. Mr Quinn was arrested on 1 August 1988 in possession of two false Greek passports and was charged on the same day with fraud, offences under the legislation on the issuing of securities and forgery of administrative documents. On the following 29 November the investigating judge added to the initial charges the aggravating circumstance of fraud by a person having solicited the public for a savings scheme.

(b) The detention on remand

10. On the day of his arrest Mr Quinn had been remanded in custody at the Santé prison in Paris.

On three occasions, 30 November 1988, 23 March and 20 July 1989, the investigating judge extended the detention by four months at a time. He took the view that detention was the sole means of ensuring the appearance for trial of an accused, who was a foreign national, who had been arrested in possession of false passports and who had several residences outside France and a large number of accomplices.

(c) The decision releasing the applicant from custody

11. Mr Quinn appealed to the Indictment Division of the Paris Court of Appeal against the order of 20 July 1989 extending his detention on remand.

After holding a hearing on 2 August 1989, the Indictment Division set aside the contested order by a decision delivered in the applicant's absence at 9 a.m. on 4 August. It directed that he should be "released forthwith if he [was] not detained on other grounds" and gave the following reasons:

"At the present stage in the investigation, which has been conducted with due diligence, and given the evidence against him, detention no longer appears necessary for establishing the truth.

In view of the reimbursements which have been, or are in the process of being, effected, it is no longer required on grounds of public order.

Finally, the seizures carried out are such as to ensure that the appellant will appear for trial and in addition he provides guarantees as regards his place of residence and his movements."

This decision was immediately enforceable and no appeal was lodged against it.

12. The applicant was not released, however. His release was subject to the decision being notified by the public prosecutor responsible for its execution and to completion of the relevant formalities.

2. The trial proceedings

13. The applicant appeared before the Paris Criminal Court while in detention with a view to extradition (see paragraphs 16 and 17 below). On 10 July 1991 he was found guilty of fraud to the detriment of ninety-three persons and of organising a campaign to solicit the public in connection with transactions involving foreign securities in France, without prior authorisation. He was sentenced to four years' imprisonment and fined 300,000 French francs (FRF). The court ordered his detention (see paragraph 30 below).

14. The prosecuting authority and Mr Quinn appealed to the Paris Court of Appeal. In a judgment of 23 April 1992 that court found that the aggravating circumstance of soliciting the public for a savings scheme was not made out and reduced the sentence to four years' imprisonment, one year of which was suspended. It ordered that he remain in detention (see paragraph 30 below).

15. The applicant, who had been in detention on remand from 1 August 1988 to 4 August 1989 and then for the duration of the court proceedings in the domestic case - a total of approximately one year and ten months -, was extradited to Switzerland on 24 September 1992 after having completed his sentence.

B. The proceedings for the applicant's extradition to Switzerland

1. Detention pending extradition

a) The applicant's arrest with a view to extradition

16. On 4 August 1989, towards 5.30 p.m., a Geneva investigating judge sent by fax to the Paris public prosecutor's office a request for the applicant's provisional arrest with a view to his extradition. The same request was transmitted through the intermediary of the International Criminal Police Organisation (Interpol) on 5 August and through diplomatic channels on 16 August. The applicant was described as "currently detained in the Santé prison in Paris, and today released on a provisional basis".

This document headed "fiche d'accompagnement" (covering note) was marked "very urgent, to be delivered in person to the addressee [a deputy public prosecutor], who is apprised of the matter".

It was accompanied by the international warrant issued by the Swiss judge for Mr Quinn's arrest on charges of professional fraud and forging securities. He was accused of having, with his accomplices, sold shares in American companies to nearly ten thousand investors throughout the world, deceiving them as to the value of the shares and using false identities to pay the sums in question into Swiss bank accounts. The total prejudice was estimated at over ten million dollars.

17. The Paris public prosecutor ordered the applicant's provisional arrest. Mr Quinn, who was still detained in the Santé prison, was arrested there. He was questioned by the prosecutor at around 8 p.m. and placed in detention with a view to extradition.

18. On 4 October 1989 the Paris Indictment Division - composed differently to the division that had ruled on the applicant's detention - served on the applicant the instrument on the basis of which he had been arrested.

(b) The applications for release

19. In the course of the extradition proceedings brought against him, Mr Quinn applied three times for his release, relying on each occasion on Article 5 (art. 5) of the Convention. He complained of the circumstances in which he had been arrested.

In its three decisions, given on 23 August 1989, 2 November 1989 and 19 December 1990, the Indictment Division dismissed his three applications, finding that the detention had been ordered in conformity with the provisions of the European Convention on Extradition. It justified its refusal to release the applicant on the grounds of the risk of his absconding and the lack of guarantees to ensure his presence in connection with the further proceedings. On the question of the length of his detention, it considered that the proceedings had been "conducted uninterruptedly and without delay".

In response to the applicant's complaint concerning the unlawfulness of the manner in which he had been placed in detention with a view to extradition, it observed that "the complaints in the pleadings on this point [were] a matter for French domestic law and [could not] be examined in extradition proceedings".

20. The applicant lodged three appeals on points of law. In a judgment of 19 December 1989 dismissing one of those appeals, the Court of Cassation stated as follows:

"... contrary to the claims of Thomas Quinn, the judges [of the Indictment Division] were not under a duty, in order to justify his continued detention, to refer solely to the provisions of Article 144 of the Code of Criminal Procedure [see paragraph 29 below], inasmuch as in extradition proceedings it is not their task to determine the merits of the charges brought against the person sought."

It observed in a judgment delivered on 15 April 1991 dismissing another appeal that the judges were not concerned with "the conditions and rules governing the foreign prosecution", and that "the decision of the Indictment Division of 4 August 1989 which ordered [the applicant's] release in the proceedings brought against him in France was entirely without force for the purposes of extradition proceedings".

2. The extradition

(a) The opinion of the Indictment Division

21. On 16 August 1989 the principal public prosecutor interviewed the applicant with a view to formally establishing his identity.

22. In a preliminary decision of 2 November 1989 the Indictment Division sought additional information from the requesting State.

The information which it obtained concerning the complainants, the bank accounts and the acts constituting the fraudulent transactions was communicated to the applicant at a hearing held on 17 January 1990. He pleaded that there had been an abuse of procedure on the part of the Swiss State. The Swiss authorities had sought to prevent the French court from exercising its jurisdiction.

23. On 14 March 1990 the Indictment Division of the Paris Court of Appeal ruled in favour of the applicant's extradition.

Expressing its view on the notions of "urgency" and "person sought" within the meaning of the European Convention on Extradition, it stated as follows:

"The assessment of the urgency is a matter for that State [Switzerland] and that urgency was justified by the fact that Quinn's release in the French proceedings had just been ordered;

The French authorities cannot be criticised for having warned the Swiss authorities as this conduct is natural and usual in the context of international judicial co-operation."

24. On 24 July 1990 the Court of Cassation dismissed as inadmissible under Article 16 of the Law of 10 March 1927 (see paragraph 28 below) Mr Quinn's appeal on points of law against the Indictment Division's opinion.

(b) The decision to extradite

25. On 24 January 1991 the Prime Minister granted the Swiss authorities' request for the applicant's extradition. The order was served on him on the following 19 February.

Mr Quinn applied to the Conseil d'Etat for a stay of execution and for review of the order, but his application was dismissed on 31 January 1992, on, inter alia, the following ground:

"... the fact that the arrest warrant was issued by a Swiss judge on the day on which the Indictment Division of the Paris Court of Appeal gave its decision on an application for release filed by Mr Quinn, who was facing charges in France, does not establish, contrary to the applicant's contention, that there was an abuse of procedure."

26. Mr Quinn, who had been in detention with a view to extradition from 4 August 1989 to 10 July 1991 - a period of one year, eleven months and six days - was surrendered to the Swiss authorities on 24 September 1992 (see paragraph 15 above).

II. Relevant law and practice

A. International law

27. The European Convention on Extradition which was signed in Paris on 13 December 1957 and which came into force on 11 May 1986 provides as follows:

Article 1 - Obligation to extradite

"The Contracting Parties undertake to surrender to each other, subject to the provisions and conditions laid down in this Convention, all persons against whom the competent authorities of the requesting Party are proceeding for an offence or who are wanted by the said authorities for the carrying out of a sentence or detention order."

Article 7 - Place of commission

"1. The requested Party may refuse to extradite a person claimed for an offence which is regarded by its law as having been committed in whole or in part in its territory or in a place treated as its territory.

..."

Article 8 - Pending proceedings for the same offences

"The requested Party may refuse to extradite the persons claimed if the competent authorities of such Party are proceeding against him in respect of the offence or offences for which extradition is requested."

Article 16 - Provisional arrest

"1. In case of urgency the competent authorities of the requesting Party may request the provisional arrest of the person sought. The competent authorities of the requested Party shall decide the matter in accordance with its law.

...

4.... The possibility of provisional release at any time is not excluded, but the requested Party shall take any measures which it considers necessary to prevent the escape of the person sought.

..."

Article 18 - Surrender of the person to be extradited

"...

3. If the [extradition] request is agreed to, the requesting Party shall be informed of the place and date of surrender and of the length of time for which the person claimed was detained with a view to surrender.

..."

Article 19 - Postponed or conditional surrender

"1. The requested Party may, after making its decision on the request for extradition, postpone the surrender of the person claimed in order that he may be proceeded against by that Party or, if he has already been convicted, in order that he may serve his sentence in the territory of that Party for an offence other than that for which extradition is requested.

2. The requested Party may, instead of postponing surrender, temporarily surrender the person claimed to the requesting Party in accordance with conditions to be determined by mutual agreement by the Parties."

B. National law

1. Extradition

28. The Law of 10 March 1927 on the extradition of aliens provides, *inter alia*, as follows:

Article 1

"Where there is no treaty, the conditions and the procedure for and the effects of the extradition shall be determined by the provisions of the present Law.

The present Law shall also apply to questions which have not been dealt with by the treaties."

Article 5

"An extradition request shall not be granted:

...

3. Where the serious or less serious offences (*crimes ou délits*) have been committed in France or in the French colonial possessions;

..."

Article 8

"Where an alien is prosecuted or convicted in France and where the French Government is requested to extradite him in connection with a different offence, he shall not be surrendered until the criminal proceedings have been concluded, and, in the event of his conviction, until the sentence has been executed.

However, this provision shall not preclude the sending on a temporary basis of the alien to appear before the courts of the requesting State, subject to the express condition that he be returned as soon as the foreign courts have given judgment.

..."

Article 16

"[If the person concerned does not consent to being surrendered to the authorities of the requesting State], the Indictment Division, in a ruling against which no appeal lies, shall give its reasoned opinion on the extradition request.

..."

Article 17

"If the Indictment Division's reasoned opinion is opposed to granting the extradition request, that opinion shall be final and the request may not be granted."

Article 18

"If the division is not opposed, the Minister for Justice shall submit, where appropriate, for the signature of the President of the Republic, an order authorising the extradition. If, within a period of one month of the extradition order being served, the authorities of the requesting State have not taken charge of the person to be extradited, he shall be released and his extradition may not be sought on the same grounds."

2. Detention on remand

29. Under Article 144 of the Code of Criminal Procedure:

"... detention on remand may be ordered or continued:

1. Where the detention on remand of the accused is the sole means of preserving evidence or material clues or of preventing either pressure being brought to bear on the witnesses or the victims, or collusion between the accused and accomplices;

2. Where this detention is necessary to preserve public order from the prejudice caused by the offence or to protect the accused, to put an end to the offence or to prevent its repetition or to ensure that the accused remains at the disposal of the judicial authorities.

..."

Article 145-1 of the Code of Criminal Procedure reads as follows:

"In cases involving 'less serious' criminal offences (matière correctionnelle) detention on remand may not exceed four months. However, at the end of this period, the investigating judge may extend the detention by an order giving reasons as indicated in the first paragraph of Article 145. No extension may be ordered for a period exceeding four months.

Where the person charged has not previously been sentenced for a serious or less serious offence (crime ou délit) to a non-suspended term of imprisonment exceeding one year and where the sentence he risks does not exceed five years, the extension of detention provided for in the preceding paragraph may be ordered only once and for a period not exceeding two months.

In other cases, the person charged may not be kept in detention for longer than one year. However, in exceptional circumstances, the investigating judge may decide at the end of that period to extend the detention, for a period not exceeding four months, by a reasoned order made in accordance with the provisions of the first and fifth paragraphs of Article 145, it being possible to renew such an order under the same procedure. Nevertheless the person charged may not be kept in detention for more than two years where the sentence he risks does not exceed five years.

..."

30. As the execution of judgments is stayed during the periods prescribed for lodging appeals, the courts may order at the trial or appeal hearing that the convicted person remain in detention on remand (Articles 464-1, 465 and 569 of the Code of Criminal Procedure). This period of detention is deducted in full from the sentence imposed (Article 24 of the Code of Criminal Procedure).

31. A person detained following a request for extradition from a foreign government is subject to the same rules as a remand prisoner (Article D 507 of the Code of Criminal Procedure).

32. The decision of the court which rules on an application for release is immediately enforceable (Article 148-2 of the Code of Criminal Procedure, second sub-paragraph); responsibility for its execution lies with the principal public prosecutor (Article 207 of the Code of Criminal Procedure).

33. Prior to his release, a remand prisoner facing charges must make a statement giving his address (Article 148-3 of the Code of Criminal Procedure), before the investigating judge if the latter has had him taken out of prison or otherwise before the governor of the prison. In so far as the governor is required to obtain a declaration of the detainee's address before releasing him, the investigating judge must inform him, when transmitting the order for his release, whether the accused has already given an address in his presence.

On release, each released detainee is issued with a release order (Article D 288 of the Code of Criminal Procedure). Where several detainees are due for release on the same day, precautions are to be taken to ensure that they do not meet each other, but the application of this rule must not have the effect of delaying beyond midday their release on the day on which they are to be released (Article D 289 of the Code of Criminal Procedure).

PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSION

34. Mr Quinn applied to the Commission on 17 July 1991. He complained of the unlawfulness and the length of his detention on remand, which he considered to be incompatible with Article 5 paras. 1 and 3 (art. 5-1, art. 5-3) of the Convention, read on its own and in conjunction with Article 18 (art. 5+18). By placing him in detention with a view to extradition, the French authorities had been simply seeking to ensure that he appeared for trial in the domestic proceedings, despite the Indictment Division's decision ordering his immediate release.

35. The Commission declared the application (no. 18580/91) admissible on 8 January 1993. In its report of 22 October 1993 (Article 31) (art. 31), it expressed the opinion that there had been a violation of Article 5 para. 1 (art. 5-1) of the Convention on account of the applicant's detention on 4 August 1989 from 9 a.m. to 8 p.m. (unanimously), and of his detention with a view to extradition (thirteen votes to four). On the other hand, it considered that there had been no breach of Article 5 para. 3 (art. 5-3) (unanimously). The full text of its opinion and of the three separate opinions contained in the report is reproduced as an annex to this judgment (1). 1. Note by the Registrar: for practical reasons this annex will appear only with the printed version of the judgment (volume 311 of Series A of the Publications of the Court), but a copy of the Commission's report is obtainable from the registry.

FINAL SUBMISSIONS BY THE GOVERNMENT TO THE COURT

36. At the hearing the Government confirmed the submissions made in their memorial, in which they "[requested] the Court to hold that there [had] been no violation of Article 5 paras. 1 and 3 (art. 5-1, art. 5-3) of the Convention".

AS TO THE LAW

I. INTRODUCTION

37. Mr Quinn maintained that he had been arbitrarily kept in detention on 4 August 1989 in order to leave the Paris public prosecutor's office time to instigate the setting in motion of the extradition proceedings and thus block the decision ordering the applicant's immediate release taken the same morning by the Indictment Division of the Paris Court of Appeal. His detention pending extradition had simply amounted to the extension, on a different legal basis, of the period of remand detention which had just come to an end in the proceedings conducted in France.

Relying on Article 5 paras. 1 and 3 and Article 18 (art. 5-1, art. 5-3, art. 18) of the Convention taken together, the applicant alleged an abuse of the extradition procedure for purposes relating to the investigation in France and complained of the unlawfulness of his detention in connection with that procedure and of the length of his pre-trial custody.

II. ALLEGED VIOLATIONS OF ARTICLE 5 PARA. 1 (art. 5-1) OF THE CONVENTION

38. According to the applicant, his continued detention on 4 August 1989 and his subsequent detention with a view to extradition infringed Article 5 para. 1 (art. 5-1) of the Convention, which, in so far as is relevant in the present case, provides as follows:

"Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law:

...

(c) the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an offence or fleeing after having done so;

...

(f) the lawful arrest or detention of a person to prevent his effecting an unauthorised entry into the country or of a person against whom action is being taken with a view to deportation or extradition."

A. The detention on 4 August 1989

39. Mr Quinn maintained that he should have been released "forthwith" in pursuance of the decision given that very morning and that he had therefore been arbitrarily kept in detention so that he could be rearrested at the request of the Swiss authorities.

40. That was also the view of the Commission.

41. The Government explained that there had inevitably been some delay in releasing the applicant on account of the formalities, which took longer to complete during the judicial vacations.

42. The Court reiterates that the list of exceptions to the right to liberty secured in Article 5 para. 1 (art. 5-1) is an exhaustive one and only a narrow interpretation of those exceptions is consistent with the aim and purpose of that provision (art. 5-1), namely to ensure that no one is arbitrarily deprived of his or her liberty (see, *inter alia*, the *Van der Leer v. the Netherlands* judgment of 21 February 1990, Series A no. 170-A, p. 12, para. 22, and the *Wassink v. the Netherlands* judgment of 27 September 1990, Series A no. 185-A, p. 11, para. 24).

The Court acknowledges that some delay in executing a decision ordering the release of a detainee is understandable. It notes, however, that in the instant case the applicant remained in detention for eleven hours after the Indictment Division's decision directing that he be released "forthwith", without that decision being notified to him or any move being made to commence its execution.

Mr Quinn's continued detention on 4 August 1989 was clearly not covered by sub-paragraph (c) of paragraph 1 of Article 5 (art. 5-1-c) and did not fall within the scope of any other of the sub-paragraphs of that provision (art. 5-1).

43. There has accordingly been a breach of Article 5 para. 1 (art. 5-1) in this respect.

B. The detention with a view to extradition

44. Mr Quinn contested in addition the lawfulness of his detention pending extradition, on account not only of the circumstances of his arrest on the evening of 4 August 1989, but also of the length of his deprivation of liberty. In view of the fact that extradition proceedings were generally conducted with great rapidity, a period of almost two years disclosed an abuse of the extradition procedure. The true aim of the French authorities had, he maintained, been to keep him at their disposal for as long as was necessary to pursue the investigation in France.

45. The Commission in substance accepted the applicant's submission.

46. The Government contested it. They pointed out that the European Convention on Extradition entailed for the States parties the obligation to extradite. They maintained that the detention pending extradition, which had been the only means of ensuring that it would be possible to surrender the applicant to the requesting State, had been ordered in the present case in conformity with the rules governing extradition, as the French courts had found. The sole purpose of that detention had been to hand the applicant over to the judicial authorities of the requesting State.

In view of the urgency of the situation - Mr Quinn's imminent release - the Swiss authorities had sent a fax on 4 August 1989 requesting the applicant's provisional arrest. The proceedings thereafter had been conducted with the diligence that is implicitly required by Article 5 para. 1 (f) (art. 5-1-f) and the attention of the Swiss authorities had been drawn to the time spent in detention so that it could be deducted from any sentence imposed. Finally, the applicant had lodged numerous appeals, which he had argued at length in the national courts, and this had contributed to prolonging his detention.

47. The Court considers that the detention with a view to extradition was in principle justified under sub-paragraph (f) of Article 5 para. 1 (art. 5-1-f).

That provision (art. 5-1) requires in the first place that the detention be "lawful", which includes the condition of compliance with a procedure prescribed by law. The Convention here refers back essentially to national law, but it also requires that any deprivation of liberty be in conformity with the purpose of Article 5 (art. 5), namely to protect individuals from arbitrariness (see the Van der Leer and Wassink judgments previously cited). The national courts, which are in a better position than the Convention institutions to determine whether domestic law has been complied with, found that the contested detention was lawful in its initial stage and as regards its purpose. They could legitimately take account of the requirements of international mutual assistance in the judicial field.

Unlike the Commission, the Court does not discern in the present case any evidence to suggest that the detention pending extradition pursued an aim other than that for which it was ordered and that it was pre-trial detention in disguise. In particular the circumstances of Mr Quinn's arrest and the fact that proceedings were conducted concurrently cannot in themselves warrant the conclusion that there was abuse, for purposes relating to national law, of the extradition procedure and accordingly that the detention ordered in response to the request of the Geneva investigating judge was unlawful.

48. The Court notes nevertheless that the applicant's detention with a view to extradition was unusually long. He was detained in connection with the extradition proceedings from 4 August 1989 to 10 July 1991, almost two years (see paragraph 26 above). Thereafter he served the sentence imposed by the Paris Court of Appeal until 24 September 1992, on which date he was surrendered to the Swiss authorities pursuant to the order of 24 January 1991.

It is clear from the wording of both the French and the English versions of Article 5 para. 1 (f) (art. 5-1-f) that deprivation of liberty under this sub-paragraph will be justified only for as long as extradition proceedings are being conducted. It follows that if such proceedings are not being prosecuted with due diligence, the detention will cease to be justified under Article 5 para. 1 (f) (art. 5-1-f). The Court notes that, at the different stages of the extradition proceedings, there were delays of sufficient length to render the total duration of those proceedings excessive: the first decision on the merits, a preliminary decision, was given on 2 November 1989, three months after the applicant had been placed in detention pending extradition, and the extradition order was not made until 24 January 1991, ten months after the Indictment Division's favourable opinion (see paragraphs 22 and 25 above). The remedies of which Mr Quinn availed himself over this period (three appeals on points of law against the decisions dismissing applications for release and one appeal on points of law against the Indictment Division's opinion - see paragraphs 20 and 23 above) did not significantly delay the proceedings.

The detention with a view to extradition continued until 10 July 1991, well after the adoption of the extradition order, as the applicant's surrender to the Swiss authorities was postponed, in accordance with Article 19 para. 1 of the European Convention on Extradition, on account of the criminal proceedings conducted in France at the same time. It is not the Court's role to determine what measures the national authorities should have taken in these circumstances to ensure that the detention pending extradition, which had already exceeded a reasonable time by 24 January 1991, did not last even longer, especially in view of the fact that such detention could not be deducted from the sentence imposed in France.

49. There has accordingly been a violation of Article 5 para. 1 (art. 5-1) of the Convention on this point too.

III. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 5 PARA. 3 (art. 5-3) OF THE CONVENTION

50. Mr Quinn also complained of the total length of his pre-trial detention. It had breached Article 5 para. 3 (art. 5-3) of the Convention, which is worded as follows:

"Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1 (c) of this Article (art. 5-1-c) shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial. Release may be conditioned by guarantees to appear for trial."

A. Period to be taken into consideration

51. According to the applicant, his detention with a view to extradition had served solely to keep him in custody for the needs of the investigation in France. His remand custody had begun on 1 November 1988 and ended on 10 July 1991 with the judgment of the Paris Criminal Court.

52. The Government expressed a view only on the first period of detention, from 1 August 1988 to 4 August 1989.

53. Like the Commission, the Court reiterates that Article 5 para. 3 (art. 5-3) refers only to paragraph 1 (c) of Article 5 (art. 5-1-c) (see the De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium judgment of 18 June 1971, Series A no. 12, p. 39, para. 71). It does not therefore apply to detention with a view to extradition within the meaning of Article 5 para. 1 (f) (art. 5-1-f).

The position is different with regard to the applicant's detention on remand in connection with the French proceedings from 1 August 1988 to 4 August 1989, a period of one year.

B. Reasonableness of the length of detention

54. The Government contended that the period in question had not exceeded the limits of what was reasonable and had been justified by the international dimension of the alleged offences and the danger of the applicant's absconding.

55. The Commission shared that view.

56. In the light of the circumstances of the case, the Court does not regard this period as excessive. In particular, it does not discern any negligence on the part of the authorities, who acted with the necessary promptness. There has therefore been no violation of Article 5 para. 3 (art. 5-3).

IV. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 18 (art. 18) OF THE CONVENTION

57. Finally, Mr Quinn accused the French authorities of having abused the extradition procedure by using it for a purpose other than that for which it was intended. Their principal objective had been to obstruct his release and that had constituted a breach of Article 18 (art. 18) of the Convention, which provides as follows:

"The restrictions permitted under [the] Convention to the said rights and freedoms shall not be applied for any purpose other than those for which they have been prescribed."

That provision (art. 18) afforded specific protection and could be invoked on its own without reference to the other Articles of the Convention.

58. Neither the Government nor the Commission expressed a view on this complaint.

59. Having already found that there is no evidence to substantiate the claim of an abuse of procedure, the Court does not consider it necessary to examine the same facts from the point of view of Article 18 (art. 18).

V. APPLICATION OF ARTICLE 50 (art. 50) OF THE CONVENTION

60. Under Article 50 (art. 50),

"If the Court finds that a decision or a measure taken by a legal authority or any other authority of a High Contracting Party is completely or partially in conflict with the obligations arising from the... Convention, and if the internal law of the said Party allows only partial reparation to be made for the consequences of this decision or measure, the decision of the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party."

A. Damage

61. Mr Quinn, relying on the practice of remission of sentence, argued that he had spent an additional eighteen months in prison. He claimed compensation of FRF 100,000 per month of unlawful detention.

62. The Government, who contested the legal basis of the claim, considered that the finding of a violation would constitute sufficient reparation for the non-pecuniary damage.

63. The Delegate of the Commission was of the opinion that the applicant was entitled to just satisfaction, but did not put forward a figure.

64. The Court takes the view that the applicant's continued detention on 4 August 1989 caused him non-pecuniary damage justifying the award of the sum of FRF 10,000. For any prejudice that he may have subsequently sustained on account of the excessive length of the detention pending extradition, it awards him FRF 50,000.

B. Costs and expenses

65. Mr Quinn sought the reimbursement of his costs and expenses, namely FRF 362,000 (Mr Bouthors: FRF 112,000; Mr Serres: FRF 250,000) for the proceedings conducted in the French courts and FRF 285,000 for the proceedings before the Convention institutions.

66. The Government regarded the sums claimed as excessive; the French authorities ought not to have to bear the consequences of the decision to have recourse to several lawyers.

67. The Delegate of the Commission did not express a view on this matter.

68. Having regard to the evidence available to it and to its case-law in this field, the Court awards the applicant FRF 150,000 for his costs and expenses, principally those incurred in Strasbourg.

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY

1. Holds that there has been a violation of Article 5 para. 1 (art. 5-1) of the Convention on account of the applicant's continued detention on 4 August 1989;

2. Holds that there has been a violation of Article 5 para. 1 (art. 5-1) of the Convention by reason of the length of the applicant's detention with a view to extradition;

3. Holds that there has been no violation of Article 5 para. 3 (art. 5-3) of the Convention;

4. Holds that it is not necessary to examine the case from the point of view of Article 18 (art. 18) of the Convention;

5. Holds that the respondent State is to pay the applicant, within three months, 60,000 (sixty thousand) French francs for non-pecuniary damage and 150,000 (one hundred and fifty thousand) francs for costs and expenses;

6. Dismisses the remainder of the claim for just satisfaction.

Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg, on 22 March 1995.

Signed: Rolv RYSSDAL President

Signed: Herbert PETZOLD Registrar